



PCSJO26-145

Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2026

Doctor

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal

Concejo de Bogotá

correspondencia@concejobogota.gov.co

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 23-02-2026 04:28:08

2026ER4118 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: RAMA JUDICIAL/MARGARITA BECERRA

DESTINO: COMISION 2º PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA A PROPOSICION 053 DE 2026

OBS:

Asunto: Respuesta a la petición radicada el 2 de febrero de 2026

Respetado Concejal Gutiérrez González:

En atención al oficio 2-2026-5016 del 29 de enero de 2026, remitido al Consejo Superior de la Judicatura por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá, mediante el cual hace traslado de las preguntas 2, 7 y 8 del cuestionario contenido en la proposición 053 de 2026, presentada al Concejo de Bogotá, en el que solicita información relacionada con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de manera atenta me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Pregunta 2. “¿Qué mecanismos existen para garantizar el debido proceso en los adolescentes en conflicto con la ley?”.

Respuesta. La Constitución y la Ley garantizan el ejercicio de los derechos y libertades de los adolescentes consagrados en todo ordenamiento internacional y nacional.

En este orden, la Ley 1098 de 2006, por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, consagra el derecho fundamental al debido proceso entre otros artículos, en el artículo 26 (Artículo 26. Derecho al debido proceso), 151 (Artículo 151. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales), 188 (Artículo 188. Derechos de los adolescentes privados de libertad) y 194 (Artículo 194. Audiencia en los procesos penales).

Por lo anterior y para dar cumplimiento a las garantías establecidas en favor de los menores infractores, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido implementando mecanismos de medios electrónicos en audiencias judiciales virtuales (incluso donde intervienen menores víctimas de violencia sexual) brindando los recursos técnicos necesarios para la grabación de las audiencias y diligencias, garantizando las condiciones de protección integral de las partes, como el uso de:

Plataformas institucionales para los servicios de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming (como Microsoft Teams) garantizan la realización de lo previamente agendado, o cuando la audiencia exige reserva según la determinación del Despacho Judicial.

Salas virtuales seguras con autenticación de identidad, control de acceso y grabación oficial, cumpliendo con la obligación de registro prevista y asegurando la confidencialidad exigida por la Ley.

Entornos protegidos para la intervención del menor, evitando exposición innecesaria y reduciendo la revictimización, en aplicación del principio de interés superior del niño (art. 8 Ley 1098 (Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia)).

Restricciones tecnológicas para impedir la descarga, copia o difusión no autorizada de material probatorio sensible, asegurando la reserva legal y la protección de datos personales.

También el Manual de Protección de Datos Personales – Versión 01 (julio de 2022), que puede ser consultado en el siguiente link

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-tecnologica>, contempla las siguientes garantías en aras de proteger los derechos de los niños y adolescentes:

1. Protección especial de los menores: Conforme al numeral 7.1 del Manual y al interés superior del menor).
2. Acceso restringido a la información: Solo personal autorizado, bajo controles de seguridad y confidencialidad.
3. Finalidad legítima y uso estrictamente necesario: Tratamiento limitado a los fines judiciales correspondientes.
4. Autorización del representante legal: Requisito previo, expreso e informado para el tratamiento de datos del menor y
5. Confidencialidad permanente: Obligación de reserva antes, durante y después del tratamiento.

Estas garantías, previstas en el citado manual, son responsabilidad de cada servidor judicial y aplican integralmente a la Rama Judicial, para procurar la protección reforzada de la información de los menores de edad.

Adicional a lo anterior, los despachos judiciales están facultados para establecer algunas condiciones particulares como:

Audiencias reservadas en casos de violencia sexual contra menores, limitando el acceso únicamente a las partes y operadores judiciales autorizados (art. 153 CGP y art. 47 Ley 1098).

Prohibición expresa de grabaciones, con advertencias al inicio de la diligencia y almacenamiento seguro en sistemas de información institucionales, bajo condiciones de seguridad e integridad.

Protección de datos personales, evitando la indexación en buscadores y asegurando que los documentos sensibles no sean públicos (art. 30 Ley 1098).

Acompañamiento psicosocial especializado durante la audiencia, conforme a los lineamientos de protección integral y enfoque diferencial (arts. 50 y 51 Ley 1098).

Capacitación a funcionarios judiciales en trato digno, enfoque de género y derechos de la infancia, para garantizar la no revictimización y el respeto a la dignidad del menor.

Pregunta 7. *“Cómo se determina la medida más adecuada para cada adolescente según la gravedad del delito”.*

Respuesta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 75 y 85 de la Ley 270 de 1996, modificados por los artículos 28 y 35 de la Ley 2430 de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura tiene a su cargo el gobierno y la administración integral de la Rama Judicial, razón por la cual las facultades en cabeza de esta Corporación son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo señalado.

En razón a ello, el Consejo Superior de la Judicatura no actúa como órgano de consulta.

No obstante, comedidamente me permito indicarle que en el artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, se establecen los criterios para definir las sanciones aplicables a los adolescentes declarados responsables de conductas penales.

Pregunta 8. *“¿Qué porcentaje de los adolescentes sancionados recibe medidas no privativas de la libertad?”.*

Respuesta¹. Al respecto, se pone a disposición el número de adolescentes sancionados durante el año 2025, así como las estadísticas de las medidas impuestas y la cantidad de sentencias proferidas a nivel nacional. De igual manera, se presenta el % de adolescentes a quienes se les impusieron medidas no privativas de la libertad, de conformidad con el reporte realizado por los funcionarios judiciales en el Sistema de información Estadística de la Rama Judicial – SIERJU:

¹ Oficio UDAEO26-583 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura envía respuesta a la petición elevada.

Estadísticas de adolescentes sancionados y medidas impuestas a nivel nacional. Año 2025

Medidas impuestas a adolescentes								
No privativas de la libertad								
Cantidad de sentencias	Número de adolescentes sancionados	Amonestación	Imposición reglas de conducta	Prestación servicio a la comunidad	Libertad asistida	Internación en medio semicerrado	Privación de la libertad en centro de atención especializado	% Adolescentes que recibieron medidas no privativas
3.764	3.271	255	688	167	1.076	522	1.070	72%

Fuente: CSJ-UDAE-SIERJU-Corte de información año 2025: 30/01/2026. Datos de la función de conocimiento en primera instancia.

Atentamente,


MARGARITA MARIA BECERRA DAWSON
Magistrada Auxiliar

PCSJ/ C Báez